

Informe de Actividades - Países en situación de riesgo

Clasificación del Índice Global de los Derechos 2018

5 – Derechos no garantizados

4 – Violaciones sistemáticas de los derechos

África	Américas	Asia	Europa	OMNA
Eswatini (4)	Brasil (4)	Corea (5)	Belarús (5)	Bahréin (5)
Mauritania (5)	Colombia (5)	Camboya (5)	Kazajstán (5)	Irán (5)
Zimbabwe (5)	Guatemala (5)	Myanmar (4)	Turquía (5)	Argelia (5)
	México (5)		Ucrania (5)	Egipto (5)

África

Eswatini (antes Swazilandia): Gracias a la acción emprendida por la CSI ante la OIT se consiguió el registro oficial de ATUSWA, afiliada a la CSI, así como que se enmendase la Ley de Supresión del Terrorismo, a fin de distinguir las actividades sindicales del terrorismo. El acceso a los mercados de EE. UU. en el marco de la Ley de Crecimiento y Oportunidad de África (AGOA, por sus siglas en inglés) se restableció en 2017 después de que el Gobierno modificara la legislación en base a las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT y tomara en cuenta las recomendaciones de TUCOSWA respecto a la Ley de Relaciones Laborales y la Ley de Intermediarios Laborales. En el caso núm. 269/17 respecto al sindicato del sector financiero Swaziland Union of Financial Institutions and Allied Workers y Nedbank Limited, el tribunal laboral emitió un dictámen en agosto de 2017 reafirmando el derecho de huelga como un derecho fundamental y declarando ilegal el reemplazo de los huelguistas. A pesar de estos logros, persisten dificultades sustanciales para garantizar la libertad sindical en el país. En 2018, las fuerzas policiales reprimieron reiteradamente manifestaciones pacíficas y los esfuerzos de diálogo de TUCOSWA continúan viéndose socavados.

Mauritania: Tras la presión internacional ejercida por la CSI, finalmente se levantaron en 2018 el control judicial y las prohibiciones para viajar impuestas por el Gobierno al secretario general de la CLTM, Samoury Ould Beye, y el secretario general de la CGTM, Abdellah Naha. Tras los informes de la CSI a la OMC, así como las peticiones en el marco de la AGOA presentadas con el apoyo de AFL-CIO, el Gobierno aceptó una Misión de contactos directos de alto nivel de la OIT y el establecimiento de una hoja de ruta para la finalización y adopción de un plan de acción contra el trabajo forzoso, así como un compromiso para acelerar las elecciones sociales para marzo de 2019. Persisten desafíos en lo relativo a la protección de las víctimas y su acceso a la justicia, ya que la ley contra la esclavitud aún no tiene efecto debido a la no aplicación de los decretos.

Zimbabwe: El apoyo de la CSI a la campaña de la ZCTU contra el *robo de salarios* obtuvo cierto éxito en lo relativo a la libertad sindical en el sector azucarero, ya que el Consejo de Negociación Colectiva de la industria del azúcar decidió poner fin a las decisiones arbitrarias de los empleadores en lo relativo a las deducciones de las cuotas sindicales. Además, en ese mismo sector se concluyó acuerdo histórico, que prohíbe la transferencia involuntaria de la afiliación de un sindicato a otro por parte de la dirección de la empresa y prevé efectivamente el fin de la deducción forzosa de las cuotas sindicales prevista para debilitar a los sindicatos. Asimismo, se levantó la congelación de

activos que pesaba contra la ZCTU. Persisten las dificultades para asegurar el pago regular de los salarios, así como la implementación de la hoja de ruta tripartita firmada para aplicar las recomendaciones de la Misión de alto nivel de la OIT en 2017. En 2018, persisten las amenazas a la libertad sindical y al derecho de sindicalización, así como la violencia policial contra manifestaciones pacíficas de la ZCTU y la detención de sus responsables.

Américas

Brasil: A pesar de la intensa campaña de la CSI, de sus afiliadas y las Federaciones Sindicales Internacionales, el expresidente Lula sigue siendo un preso político, y el fallo que le impidió presentarse como candidato para las elecciones presidenciales constituye una parodia de justicia que demuestra hasta qué punto el sector corporativo domina todo el marco institucional en Brasil. Los derechos laborales están siendo amputados por las autoridades gubernamentales a una velocidad sin precedente. El movimiento sindical internacional apoyará a los sindicatos de Brasil vigilando de cerca las violaciones y defendiendo el respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras bajo la administración entrante del presidente de extrema derecha Bolsonaro, y seguirá solidarizándose con Lula y exigiendo su liberación.

Colombia: Los sindicatos colombianos, con el apoyo de la CSI y la TUAC, incluyeron con éxito las demandas laborales al proceso de adhesión de Colombia a la OCDE. Pese a que finalmente se invitó al país a formar parte de la OCDE en 2018, durante más de cuatro años los sindicatos mostraron claramente a los miembros de la OCDE el fracaso del Gobierno para avanzar en el ámbito de los derechos y la seguridad de los sindicatos. Asimismo, se incluyeron cuestiones laborales clave en un marco de seguimiento posterior a la adhesión. El acuerdo de paz colombiano con el respaldo de los sindicatos fue una gran victoria. Sin embargo, pesan graves amenazas sobre el proceso de paz en Colombia. Las empresas mineras se están trasladando a zonas indígenas, y los paramilitares se están reagrupando para ocupar áreas abandonadas por las FARC según los términos del acuerdo de paz. La situación resulta profundamente alarmante, pone en riesgo el proceso de paz y se ve agravada por la violencia cada vez mayor que se ejerce contra los sindicalistas.

Guatemala: La queja de los trabajadores y trabajadoras presentada ante la OIT desembocó en una reforma pendiente desde hace tiempo para regular la inspección del trabajo. Gracias a los cambios adoptados en 2017, los inspectores adquirieron nuevos poderes, entre ellos la posibilidad de imponer sanciones a los empleadores que violan el Código del Trabajo. Las discusiones entabladas bajo los auspicios de la OIT también ayudaron a los sindicatos guatemaltecos a obtener la creación de una Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical en el país. La posible supresión de la Comisión de la ONU contra la Impunidad en Guatemala sigue siendo un desafío que debe ser tomado seriamente en cuenta por la comunidad internacional y el movimiento sindical. La CSI continuará apoyando a las organizaciones afiliadas para el seguimiento de la implementación de los acuerdos internacionales concluidos con el Gobierno para el cumplimiento de leyes laborales justas.

México: La aprobación de las reformas constitucionales y más tarde la decisión del Senado de México, el 20 de septiembre de 2018, de ratificar el Convenio núm. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva, son victorias importantes para los trabajadores y trabajadoras mexicanos. Fueron el resultado de una campaña sostenida de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la CSI, la CSA y las Federaciones Sindicales Internacionales. La conformidad de la ley mexicana con el Convenio significará que los trabajadores y las trabajadoras ya no deberán seguir soportando el uso que se ha hecho durante décadas de los denominados “contratos de protección”,

según los cuales sindicatos falsos concluyen acuerdos corruptos con los empleadores en nombre de los trabajadores sin su conocimiento o consentimiento. En el futuro, uno de los desafíos será garantizar que la erradicación de los contratos de protección sea una realidad en la práctica.

Asia

Corea: Los sindicatos coreanos lograron que se diese marcha atrás en la reforma de la legislación laboral regresiva iniciada por el Gobierno antisindical y dominado por el imperio empresarial de los *chaebol*, encabezado por la corrupta y entonces presidenta del país Park Geun-hye. La manifestación popular organizada por la KCTU el 14 de noviembre de 2015 contó con la participación de aproximadamente 70.000 personas. Al año siguiente, Han Sang-gyun, presidente de la KCTU, fue condenado a tres años de prisión y fueron detenidos más de 200 de sus dirigentes. Cincuenta y seis de ellos serían procesados por causas penales. Se formó una amplia coalición de más de un centenar de sindicatos y organizaciones progresistas de la sociedad civil para restaurar la democracia en Corea. Iniciaron una movilización nacional que duró tres meses, de noviembre de 2016 a marzo de 2017, reclamando la dimisión de Park. Millones de personas asistieron a las movilizaciones semanales, ahora conocidas como la Revolución de las velas. En abril de 2017, Park fue destituida y encarcelada, acusada de cohecho y abuso de poder. Además, el presidente de Samsung fue condenado a cinco años de prisión por corrupción y colusión. El nuevo presidente del país, Moon Jae-in, liberó bajo fianza a los dirigentes de la KCTU, Han Sang-gyun y Lee Young-joo y se comprometió a ratificar el Convenio núm. 87 de la OIT para 2019. Gracias a la campaña nacional e internacional y a la organización y movilización de los trabajadores y de víctimas de enfermedades profesionales en Samsung por parte del KMWU y SHARPS, el *chaebol* antisindical firmó un acuerdo histórico con el sindicato de la metalurgia, KMWU, para reconocer al sindicato y regularizar a 6.000 trabajadores subcontratados. Las prácticas antisindicales de Samsung fueron ampliamente expuestas por los sindicatos en Corea, la región asiática e internacionalmente a través de la publicación conjunta de la CSI e IndustriAll: *Samsung expuesto: Tecnología moderna - condiciones medievales* y la subsiguiente campaña. El Gobierno de Corea ahora está investigando los casos de comportamiento antisindical de Samsung para llevar este *chaebol* ante la justicia penal.

Camboya: La libertad sindical, de expresión y el derecho de huelga se han visto socavados en Camboya desde la huelga de los trabajadores y trabajadoras de la confección en enero de 2014. La democracia ha experimentado un retroceso tras la disolución del mayor partido de la oposición y la reelección del primer ministro Hun Sen en 2018, que ocupa el poder desde hace 33 años, el mandato de mayor duración en Asia. La Ley de Sindicatos aprobada en 2015 y la represión contra los medios independientes han empeorado el clima antisindical. Los sindicatos están sujetos a un control financiero y administrativo por parte del Gobierno y a restricciones estrictas en lo relativo a la representación de los trabajadores y las trabajadoras en la negociación colectiva, los conflictos laborales y las huelgas. La ley igualmente restrictiva sobre las ONG exige el registro de todas las asociaciones nacionales e internacionales, su “neutralidad política” y otorga un poder discrecional ministerial absoluto sobre sus actividades. El Gobierno de Camboya se resiste a restaurar la democracia y los derechos y cada vez depende más de las inversiones chinas, cuyo historial es nefasto en materia de violaciones de los derechos humanos y sindicales, así como la discriminación de los sindicatos independientes.

Myanmar: La central sindical CTUM, tras dos décadas en el exilio viéndose forzada a trabajar desde Tailandia, finalmente sería registrada oficialmente en 2015. Desde entonces, la CTUM ha organizado un número impresionante de trabajadores y trabajadoras. No obstante, se ha sindicalizado menos del uno por ciento de la fuerza laboral. Los trabajadores y trabajadoras del sector informal no pueden registrar un sindicato y se deniega el acceso a muchos lugares de trabajo controlados por las

autoridades gubernamentales y el ejército. No existe una ley sobre la negociación colectiva, y se observa un rápido aumento de los despidos discriminatorios. La CTUM y los demás sindicatos desempeñan un papel indispensable en la modificación de la legislación obsoleta e irregular relacionada con el trabajo y en la resolución de conflictos laborales a nivel tripartito. Por otro lado, no se ha avanzado en la protección de los derechos de las minorías, incluyendo la crisis de los rohingya, en Rakhine. Aun cuando los militares siguen controlando todos los sectores estratégicos y los recursos naturales del país, el Gobierno civil electo debe demostrar su respeto por el derecho internacional y frenar las violaciones contra los derechos humanos de todas las minorías étnicas. Las reformas políticas, las conversaciones de paz en las zonas de conflicto y en materia de empresas y derechos humanos han de impulsarse con la inclusión de la participación de los sindicatos, la sociedad civil y todas las minorías étnicas.

Europa

Belarús: La CSI denunció las duras condenas impuestas a los dirigentes sindicales belarusos Gennady Fedynich e Ihar Komlik, del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Industria Electrónica (REP), el 24 de agosto de 2018. Fedynich y Komlik fueron declarados injustamente culpables, por el impago de impuestos personales en relación con los fondos recibidos a través de programas internacionales de ayuda solidaria, siendo condenados a una multa de 47.560 BYN (más de 23.000 USD), una pena de prisión de cuatro años y la prohibición de ocupar cargos de alto nivel durante cinco años. La CSI continuará apoyando la lucha de los sindicatos independientes belarusos.

Kazajstán: En julio de 2018, la CSI recibió con satisfacción la puesta en libertad condicional de dos líderes del movimiento sindical independiente de Kazajstán, Nurbek Kushakbaev y Amin Eleusinov, e insistió en que se retiraran todos los cargos en su contra, así como los cargos igualmente falsos presentados contra Larisa Kharkova, presidenta de la Confederación de Sindicatos Independientes (CITUK/ KNPRK). Kushakbaev y Eleusinov fueron condenados a prisión a causa de su participación en protestas pacíficas, mientras que la sentencia dictada contra Kharkova limita su libertad de movimiento además de haberle confiscado todas sus propiedades. Los tres sindicalistas fueron inhabilitados para ocupar cualquier cargo público, incluso dentro de una organización sindical. Las trabas continúan con la anulación del registro de la CITUK y sindicatos individuales, las nuevas acusaciones falsas contra los responsables de la CITUK y la aplicación continua de una legislación sindical represiva, que socava la libertad sindical.

Turquía: Pese a haberse levantado el estado de emergencia, el país sigue regido por decretos. Se eleva a 169.013 el número de personas objeto de procesos judiciales, incluso por actividades sindicales legítimas. Desde el intento de golpe de Estado en julio de 2016, miles de trabajadores y trabajadoras han sido despedidos sumariamente. Solo en abril de 2017, fueron despedidos 3.974 trabajadores de los servicios públicos. En 2017 y 2018, el Gobierno prohibió numerosas huelgas organizadas en los sectores del vidrio y el metal por considerarlas “perjudiciales para la seguridad nacional”. Tras las protestas en el nuevo aeropuerto de Estambul contra la muerte de 37 trabajadores debido a la deficiencia de las normas de salud y seguridad en el trabajo, 600 trabajadores fueron arrestados y 27 representantes sindicales siguen encarcelados, entre ellos Özgür Karabulut, presidente de Devrimci Yapı-İş-DİSK. La CSI continuará apoyando a las organizaciones afiliadas en Turquía en su lucha por los derechos y libertades fundamentales con arreglo a la declaración conjunta de mayo de 2017, adoptada por la CSI, la CES y sus afiliadas turcas.

Ucrania: La libertad sindical y el derecho de las organizaciones sindicales a la autogestión se encuentran en grave peligro. La nueva legislación de 2017 ahora obliga a los miembros sindicales a presentar cada año declaraciones electrónicas adicionales sobre sus bienes personales y propiedades, mientras que los activistas son víctimas de violencias y de acoso por parte de bandas

no identificadas, como el reciente ataque de 30 militantes desconocidos que asistieron a una reunión en los locales del sindicato pretendiendo formar parte del Presidium de la FTUU. Además, los atrasos salariales han aumentado vertiginosamente, y los trabajadores y trabajadoras que no han cobrado su salario realizan acciones de protesta espontáneas, a menudo al borde de la desesperación, como los 94 mineros de la mina de uranio Ingulska, a quienes luego demandaría su empleador por daños y perjuicios.

OMNA

Bahréin: Con el apoyo de la CSI, la GFBTU logró registrar el nuevo Sindicato de Servicios Generales (GSTU), con trabajadores y trabajadoras migrantes entre sus miembros. Además, finalmente se levantó la prohibición de viajar del secretario general adjunto de la GFBTU. En 2018, el Gobierno aceptó una Misión de contactos directos de la OIT, y se ha avanzado en la implementación de los acuerdos tripartitos de 2012 y 2014. Se reinstaló en su puesto a un mayor número de trabajadores y el Gobierno se comprometió a revisar la legislación. Sin embargo, persiste la discriminación en el país y se aplican arbitrariamente nuevos despidos discriminatorios. Además, persisten los problemas para la organización del sector público. La CSI continuará apoyando a las afiliadas en Bahréin en su lucha por los derechos y libertades fundamentales.

Irán: La CSI está alarmada por los informes de nuevos ataques y detenciones de trabajadores por participar en actividades sindicales, redadas nocturnas a las viviendas por parte de las fuerzas de seguridad y nuevas medidas contra los sindicalistas de varios sectores, así como contra las personas que participaron en las protestas en enero de 2018. Los trabajadores del complejo siderúrgico nacional de Ahvaz fueron detenidos durante varios días por hacer huelga para reclamar los atrasos salariales. Mohammad Habibi, secretario de la Federación de Docentes de Irán, fue arrestado dentro del aula frente a sus alumnos. Las fuerzas de seguridad lo asaltaron con gas pimienta y se lo llevaron esposado hasta su domicilio, que fue registrado. Posteriormente le condujeron a la prisión de Evin, donde muchos otros sindicalistas han estado arbitrariamente detenidos durante años. Los trabajadores del complejo azucarero Haft Tapeh, que reclamaban los salarios adeudados desde hacía seis meses, finalmente cobraron tras una larga campaña durante la cual los trabajadores que protestaban fueron víctimas de una represión brutal. Incluso después del levantamiento de las sanciones internacionales, la mala gestión económica es generalizada, en gran medida debido al control omnipresente del ejército iraní sobre la economía y la influencia de los clérigos conservadores. Los trabajadores y trabajadoras que participan en actividades sindicales independientes son víctimas de una feroz represión, incluyendo el encarcelamiento por cargos falsos, como los casos de Reza Shahabi, Esmail Abdi, Ebrahim Madadi y muchos otros más. Según informes, en 2018, 150 camioneros fueron arrestados y 17 activistas condenados a muerte por un tribunal en la provincia de Qazvin. La CSI continuará apoyando a las Federaciones Sindicales Internacionales y a sus afiliadas en el país.

Argelia: La libertad sindical y el derecho de sindicalización de los sindicatos independientes siguen bajo amenaza. Desde 2015, no se han dado pasos suplementarios en el registro de sindicatos independientes. Al mismo tiempo, el código laboral, que se encuentra en la etapa de borrador desde 2011, todavía no ha sido aprobado. La violencia policial y el acoso en general contra los dirigentes sindicales independientes continúan, y los despidos injustos y la discriminación antisindical contra las afiliadas de CGATA no dejan de aumentar. La CSI ha remitido las violaciones más recientes a la Comisión de Aplicación de Normas y al Comité de Libertad Sindical de la OIT. Se han dirigido, conjuntamente con las Federaciones Sindicales Internacionales, varias solicitudes de intervención urgente a la OIT.

Egipto: La creciente represión estatal contra el movimiento sindical independiente en Egipto es alarmante. El marco legislativo, en particular la nueva ley núm. 213/2017, aplasta efectivamente cualquier intento de organización libre imponiendo requisitos excesivos y exorbitantes, mientras que la policía y las fuerzas armadas dispersan sistemáticamente las huelgas pacíficas, golpeando y deteniendo a manifestantes, procediendo en ocasiones al arresto “preventivo” de sindicalistas. Además, el “proceso de regularización” impuesto por la mencionada ley y mediante el cual los sindicatos estaban obligados a presentar nueva documentación para su reconocimiento legal, ha dado lugar a innumerables violaciones del derecho a establecer y afiliarse a organizaciones sindicales. La CSI ha remitido las violaciones más recientes a la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT y ha planteado los problemas existentes a través de los mecanismos de examen de la OMC.